



AUTO INTERLOCUTORIO

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Marina del Socorro Muñoz Jiménez
DEMANDADO	UNE EPM telecomunicaciones S.A. y otros
RADICADO	05-001-31-05- 008-2014-01397
TEMA	Apelación costas procesales
DECISIÓN	Confirma auto recurrido

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, dentro del proceso ordinario, promovido por **MARINA DEL SOCORRO MUÑOZ JIMÉNEZ** contra **UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., SEGURTRONIC LTDA.**, y la llamada en garantía **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.**, procede a resolver lo pertinente.

A continuación, se toma la decisión correspondiente mediante providencia interlocutoria, según acta de discusión de proyectos **N° 094**, aprobada por los integrantes de la Sala.

Llegó el auto a este Tribunal para conocer del recurso de apelación formulado por el apoderado de UNE EPM TELECOMUNICACIONES, contra la decisión tomada por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 18 de diciembre de 2019, mediante el cual se repuso el auto del 31 de octubre del mismo año, que liquidó las costas procesales por un valor total de \$1.378.064 a cargo de las demandadas.

Para la sustentación del recurso el apoderado de UNE EPM TELECOMUNICACIONES considera: que el auto del 18 de diciembre de 2019, a pesar de que indica “reponer” el auto del 31 de octubre de 2019, este mantuvo incólume las sumas incorporadas a la liquidación de costas inicial, además de incluir otras sumas que claramente muestran que no se repuso la

decisión. Que el trámite procesal se adelantó sin mayores dilaciones que las necesarias, por lo que las actuaciones procesales en ningún momento fueron excesivas o retrasadas intencionalmente. Que el juzgado no tuvo en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado de la parte demandante, la cual exigió un mínimo esfuerzo a lo largo del proceso. Y que se debe aplicar el acuerdo 2222 de 2003, sobre el cual el valor máximo de las agencias en derecho en primera instancia debió ascender al 20% de \$2.556.259 es decir a un total máximo de \$511.251, y el valor límite por agencias en derecho de segunda instancia, correspondería al 5% de \$2.556.259 es decir \$127.812.

Una vez transcurrido el término de traslado para presentar alegatos, el apoderado de UNE EPM TELECOMUNICACIONES, señaló que se debe revocar el auto de fecha 31 de octubre de 2019, toda vez que la fijación de costas y agencias en derecho es una carga contra la parte vencida en el proceso, siendo no otra cosa que una sanción pecuniaria a favor de la parte victoriosa. Así mismo, de conformidad con la descripción legal y la jurisprudencia constitucional, las agencias en derecho corresponden a una contraprestación por los gastos en que se incurre para ejercer la defensa legal de los intereses dentro de un trámite judicial, en atención a la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente. Que el trámite procesal se adelantó sin mayores dilaciones que las necesarias, por lo que las actuaciones procesales en ningún momento fueron excesivas, causadas o retrasadas intencionalmente por mi representada. Que no existió una discriminación del valor por costas y agencias en derecho a cargo de cada una de las entidades demandadas. Que se trasgredió el límite máximo establecido por el acuerdo aplicable. Que existió violación del principio non reformatio in pejus. Y que considerando el criterio de razonabilidad y objetividad que debe imperar en la liquidación de agencias en derecho, es claro que el monto fijado por el concepto de costas y agencias en derecho para primera y segunda instancia en el proceso de la referencia, resulta excesivo y carece de fundamento fáctico y jurídico.

Al respecto el Tribunal hace las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las expensas judiciales – entendidas éstas como los gastos necesarios para el trámite del juicio - (honorarios de peritos, copias, diligencias que deban llevarse a cabo por fuera del Despacho Judicial) y las agencias en derecho – dinero que se adeuda por los gastos en que incurrió la parte triunfante de un proceso con la contratación del profesional que defendió sus intereses – (honorarios) hacen parte integrante de las costas procesales. Se constituyen, por tanto, en erogaciones que debe cubrir la parte vencida en el proceso.

Igualmente las agencias en derecho *“representan una contraprestación por los gastos en que la parte incurrió para ejercer la defensa judicial de sus intereses”* y es *“el juez quien, de manera discrecional, fija la condena por este concepto con base en los criterios establecidos en el artículo 393 – 3 – del Código de Procedimiento Civil... Dicha condena no corresponde, necesariamente, a los honorarios efectivamente pagados por la parte vencedora a su apoderado...”* (Sentencia de la Corte Constitucional C – 539 julio 28/99) (Subrayas por fuera del texto).

El artículo 366 -4- del Código General del Proceso, indica que para la fijación de agencias en derecho se consultará las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Determina, igualmente, que si *“...éstas solamente establecen un mínimo, o éste o un máximo, el juez tendrá además en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de esas tarifas...”*

Lo primero que debe dejarse claro, es que en el presente caso se debe dar aplicación integra al Acuerdo 1887 de 2003 y no al Acuerdo 2222 de 2003, toda vez que este solo modificó lo concerniente a los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del artículo sexto del título I del Acuerdo 1887 de 2003, el cual habla de las tarifas de agencias en derecho en materia Civil, Comercial, Agrario y Familia, siendo aplicable el título II, el cual regula la materia laboral.

De igual manera, tampoco se puede dar aplicación al Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, ya que este en su artículo 7, indica que dicho acuerdo

solo se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de la fecha de la publicación, por lo que los procesos comenzados con anterioridad al mismo, como es el caso que nos convoca, seguirá regulado por los reglamentos anteriores sobre la materia, esto es el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Se tiene pues, que el Acuerdo 1887 de 2003, reza en su artículo 6° numeral 2.1.1, en favor del trabajador, lo siguiente:

(...)

Primera instancia.

Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Segunda instancia.

Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones confirmadas o revocadas total o parcialmente en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.

En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

PARÁGRAFO. Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

(...)

Sin embargo, si bien existen unas tarifas de agencias en derechos reguladas, no puede desconocerse que la normatividad aludida, establece criterios de carácter **cualitativo** y **cuantitativo** para que el juzgador fije las agencias en derecho, más no se deduce de la interpretación de tales disposiciones que éstas, de manera automática, impongan el valor de dicha erogación, pues simplemente orientan al juez para que, en uso de su discrecionalidad, fije un

monto que considere prudente y proporcional con el valor de las condenas por él reconocidas, el tipo de proceso, y la duración y calidad de la gestión que realizó el apoderado en el transcurso del proceso, teniendo como límite el tope máximo fijado por la ley, pero sin que ello signifique que de manera necesaria, que el fallador esté condicionado a fijar como agencias el máximo legal.

Descendiendo al caso de autos, encuentra esta judicatura que la gestión del apoderado de la actora en el proceso de la referencia se circunscribió a la presentación de la demanda el 2 de octubre de 2014 y al recaudo de la prueba documental, igualmente, no sobra decir que el presente asunto en primera instancia hasta el momento de liquidarse las agencias en derecho, tuvo una duración de 5 años, 2 meses y 16 días.

Las agencias impuestas en primera instancia se compadecen con el tema debatido, pues hay que tener en cuenta que la naturaleza del asunto permite que se puedan tasar hasta el 25% del valor de las pretensiones.

Atendiendo tales circunstancias, este Tribunal considera pertinente **CONFIRMAR** el valor de las agencias en derecho de la primera instancia, imponiendo por tal concepto una suma de \$639.064 en primera instancia, \$600.000 en segunda instancia y \$139.000 por concepto de gastos judiciales.

En conclusión y sin necesidad de más consideraciones al respecto, se **CONFIRMARÁ** el auto recurrido por las razones que se han dejado consignadas.

Sin costas en el recurso.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

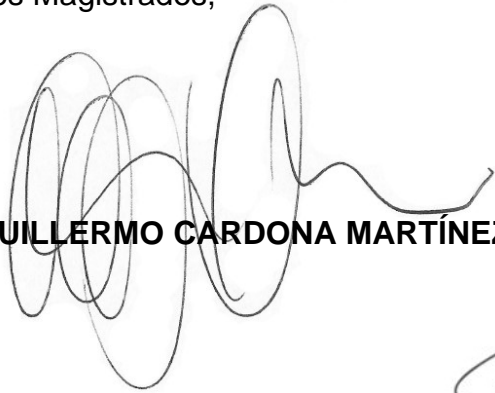
RESUELVE:

PRIMERO: Se **CONFIRMA** el auto recurrido que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia conocidas.

SEGUNDO: Sin costas en el recurso.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena devolver el expediente al juzgado de origen. En constancia firman:

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por
estados N° 073 del 30 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>